

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MATILDE SUAREZ LEÓN
DEMANDADOS	COLPENSIONES, AFP COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-021-2018-00639-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Adiciona, revoca y confirma

Medellín, nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MATILDE SUAREZ LEÓN** en contra de **COLPENSIONES** y las **AFP COLFONDOS S.A.** y **PROTECCIÓN S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 018**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de COLFONDOS S.A. y de la demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 13 de diciembre de 2019; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que, la demandante, quien nació el 1º de junio de 1960, se afilió al régimen de prima media con prestación definida, administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales, desde marzo de 1982; posteriormente se trasladó desde abril de 1995 al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de COLFONDOS S.A., trasladándose posteriormente, desde febrero de 2002 a PROTECCIÓN S.A., donde se encuentra actualmente.

Se duele que los asesores ejecutivos de las administradoras del RAIS, no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la apta información; y que, al contrario, le ocultaron información relevante.

Agregó, que conforme a las proyecciones pensionales que le fueron presentadas, su pensión resulta ampliamente deficitaria en el régimen privado, con relación a la que le correspondería de haber permanecido en el régimen de prima media con prestación definida.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se declare la ineficacia de sus afiliaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por las administradoras del régimen privado demandadas, y que en consecuencia, se ordene a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes que la señora MATILDE SUAREZ LEÓN efectuó al régimen de ahorro individual, incluidos los rendimientos y sin descuento alguno por cuotas de administración, debiendo ordenar a dicha entidad, recibir todos esos valores y activar su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, como si nunca hubiese dejado de pertenecer a dicho régimen pensional, condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas, a dar respuesta a la misma, a través de sus respectivos apoderados judiciales (folios 78 y ss. del expediente).

COLPENSIONES describió el traslado de esta acción, según escrito visible a folios 78 al 84 del expediente.

A través del mismo, se opuso únicamente a una eventual condena en costas; aceptó la edad de la demandante y sus afiliaciones a las distintas administradoras, negando los demás hechos, y; propuso las excepciones perentorias que denominó “*PRESCRIPCIÓN, INEXISTENCIA DE VICIO EN EL CONSENTIMIENTO, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y COMPENSACIÓN*”.

PROTECCIÓN S.A. describió el traslado de esta acción, a través de escrito visible a folios 103 y siguientes del expediente, mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda; aceptó la edad de la demandante y; formuló las excepciones de *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES y la excepción INNOMINADA O GENÉRICA”*.

COLFONDOS S.A., hizo lo propio, y su contestación se observa a folios 190 y siguientes del expediente.

A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; aceptó la edad y la afiliación de la demandante, negando los demás hechos, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, COMPENSACIÓN, PAGO y la excepción INNOMINADA O GENÉRICA”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 13 de diciembre de 2019, el Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de COLFONDOS S.A. y le impuso obligaciones tanto a dicha entidad como a PROTECCIÓN S.A.

A COLFONDOS S.A. le ordenó devolver a COLPENSIONES, las sumas descontadas a título de cuotas de administración y primas previsionales por el tiempo que la asegurada perteneció a dicha administradora; por su parte, a PROTECCIÓN S.A., le ordenó devolver a COLPENSIONES el saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante con sus respectivos rendimientos, así como los saldos descontados a título de garantía de la pensión mínima.

Condenó en costas procesales únicamente a COLFONDOS S.A., argumentando que las mismas no se causaban en contra de COLPENSIONES ni PROTECCIÓN S.A., al no ser las entidades que dieron origen a la ineficacia.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los apoderados judiciales de la demandante y de PROTECCIÓN S.A.

La apelación de la demandante, versó sobre el inconformismo con la absolución de costas procesales a PROTECCIÓN S.A., destacando el criterio objetivo contenido en el artículo 365 del CGP y la oposición a las pretensiones que esta entidad presentó en el curso del proceso. Solicitó la revocatoria de dicha absolución, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda salieron adelante y dicha entidad fue vencida en juicio.

La parte demandada COLFONDOS S.A. recurrió la sentencia, expresando su inconformismo con los efectos de la ineficacia dados por el A quo. Concretamente reprocho de la misma la orden de devolución de los rendimientos financieros en favor de la demandante, solicitando la modificación de dicha orden y su sustitución por una equivalencia financiera que sea inferior a los rendimientos, argumentando que el efecto de la ineficacia es que todas las cosas retornen a su estado anterior conforme a la ley.

Bajo estos mismos argumentos, solicitó que se revoque la orden de devolver las cuotas de administración y las primas previsionales. Lo sustentó expresando que se trata de descuentos legales que se encuentran debidamente justificados, se trata de partidas que ya fueron causadas y debidamente ejecutadas por la entidad, permitieron en su momento brindarle cobertura a la demandante frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, no existe prueba de que Colpensiones vaya a sumir un detrimento patrimonial que afecte su estabilidad financiera si no recibe esos rubros, bajo la doctrina jurisprudencial de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia no se

contemplan esas devoluciones, y en este caso el juez no está revestido de facultades ultra y extra petita para ordenar estas devoluciones.

Alegatos de Conclusión:

En la debida oportunidad procesal, la apoderada judicial de la demandante presentó alegatos de conclusión. A través de los mismos solicitó se confirme la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos de hecho y de derecho plasmados en la demanda.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por los apoderados judiciales de la demandante y de COLFONDOS S.A.; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó la demandante, a través de COLFONDOS S.A., como la primera administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió, alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos, y si en lo sucesivo, su traslado a PROTECCIÓN S.A. en el mismo régimen, corrió igual suerte.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008,

SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 34 y siguientes del expediente, se advierte que la señora MATILDE SUAREZ LEÓN, se afilió al régimen de prima media con prestación definida, administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales, desde marzo de 1982; posteriormente se trasladó desde abril de 1995 al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de COLFONDOS S.A., trasladándose posteriormente, desde febrero de 2002 a PROTECCIÓN S.A., donde se encuentra actualmente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que ninguno de los fondos privados a los que estuvo afiliada la demandante, alcanzó a probar haberle brindado asesoría con suficiencia y en el momento preciso y determinante para que hubiere tomado la decisión que más le convenía.

Si bien esta sala no comparte algunos argumentos del A quo sobre el tema de la ineficacia, como el hecho de valorar en términos concretos esta situación a partir del beneficio o el perjuicio que se pudo haber sufrido en comparación con las variantes del régimen de prima media, e incluso otros aspectos que enarboló, como por ejemplo la validez de la re asesoría, y otras cuestiones que lo alejan de la línea jurisprudencial vigente en el órgano de cierre, de todas maneras, al constatarse que llegó a la misma conclusión de la ineficacia, queda relevada esta sala de profundizar en estas cuestiones, máxime cuando propiamente en concreto no fueron temas de apelación.

Debe decirse, que, si bien la asegurada alcanzó a pertenecer a varias administradoras de fondos de pensiones a lo largo de su permanencia en el RAIS, la ineficacia se configuró desde la primera vez, cuando se afilió a la AFP COLFONDOS S.A., quedando afectada con esa sanción legal la posterior vinculación que llevó a cabo dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la administradora PROTECCIÓN S.A.

Como se ha destacado al citar la jurisprudencia nacional aplicable, sin importar que la firma del formulario efectivamente corresponda a la de la demandante, tal suscripción no es prueba inexorable del suministro cabal y absoluto en el proceso de traslado de régimen.

Ahora, no puede perderse de vista que las obligaciones de asesoría no se crearon a partir de recientes disposiciones, sino que es una obligación que siempre ha existido, desde que fueron promulgados los dos regímenes pensionales, a través de la Ley 100 de 1993.

Por lo demás, bien es sabido que las obligaciones probatorias del fondo privado dentro del proceso resultan insoslayables, si se tiene en cuenta que es la entidad que se encarga de prestar el servicio público de la seguridad social, y es quien tiene de primera mano la información suficiente, la logística de funcionamiento idónea para funcionar, no puede excusarse del cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado y posterior movilidad de la señora SUAREZ LEÓN dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional de la demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP COLFONDOS SA., encontrándose también afectado de ineficacia el acto de afiliación a PROTECCIÓN S.A., esto es, se encuentra válidamente afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

Ahora, el tema de las devoluciones económicas, constituye un punto de apelación de PROTECCIÓN S.A., quien pretende que se revoque el numeral 3º de la parte resolutive de la sentencia, contentivo de la decisión de devolver el porcentaje de cuotas de administración y las primas previsionales; a su vez, frente a este aspecto esta Sala dispone de la competencia para pronunciarse,

en virtud del Grado Jurisdiccional de Consulta, que impone la necesidad de revisar el tema, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele a la demandante.

Para resolver, estima la Sala que no les asiste razón a la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A., ya que es imperioso mantener la orden de devolución de las cuotas de administración y gastos previsionales, al punto que incluso, **adicionarla**, en sentido que las mismas sean remitidas en el término de los 3º días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, y comprendiendo no solo las cuotas de administración y primas previsionales, sino también el porcentaje descontado por garantía de pensión mínima, obligación que deben cumplir tanto COLFONDOS S.A., como PORVENIR S.A.

Además de lo anterior, dichas sumas deberán trasladarse debidamente indexadas, en el caso de COLFONDOS S.A., a efectos de que COLPENSIONES reciba dichas sumas actualizadas y sin la depreciación monetaria, ya que al ser la primera administradora a la que estuvo afiliada la demandante en el RAIS, dichos dineros se encuentran actualmente desactualizados.

Así las cosas, **se adicionarán** los numerales 2º y 3º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia. El primero de ellos, en orden a que PROTECCIÓN S.A. remita dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, con destino a Colpensiones, no solo los aportes acreditados en la cuenta de ahorro individual de la asegurada con los rendimientos financieros y el porcentaje descontado por garantía de pensión mínima, sino también las cuotas de administración descontadas y primas previsionales. Y, el numeral 3º, a efectos de que COLFONDOS S.A., remita en ese mismo lapso, y debidamente indexadas, no solo las cuotas de administración y de seguro previsionales, sino también los porcentajes descontados con destino al fondo de la garantía mínima.

Las razones jurídicas en las que se sustenta esta adición, parten de entender que al regresar las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de que la actora suscribiera el traslado de régimen pensional, deben regresarse todos los conceptos cobrados por las administradoras del régimen privado, incluso completando dichas sumas de sus propios patrimonios, teniendo en cuenta que se trata de dineros que pertenecen a la cotización de la asegurada, y que ella no dio lugar a la ineficacia.

Ahora, esta sala no acoge los planteamientos de la recurrente, consistentes en referir el carácter legal de estos descuentos, el supuesto desbordamiento de la línea jurisprudencial, las razones de cobertura previsional, el supuesto enriquecimiento sin causa que se generaría y las gestiones de administración adelantadas, ya que es connatural a la ineficacia el retorno de todas las cosas al estado anterior, ya que la demandante no fue quien dio lugar a esta sanción, y Colpensiones no tiene por qué asumir las consecuencias económicas de la merma en la cotización, debiendo responder al mismo tiempo por la asunción futura de los riesgos de la seguridad social.

Debe tenerse en cuenta que la demandante al retornar a prima media lo hace sin solución de continuidad como efecto de la ineficacia declarada, las primas pagadas se dieron en virtud de un acto que no produjo efectos jurídicos, y los efectos jurídicos del traslado no se valoran en términos de buena o mala fe, sino en el marco del cumplimiento de las obligaciones profesionales por parte de los respectivos fondos de pensiones. Tampoco acoge esta sala el argumento que impondría la fustigación de los rendimientos financieros que se generaron en favor de la demandante, ya que en este aspecto es viable aplicar el principio del derecho conforme al cual nadie puede derivar provecho de su propia impericia.

Finalmente, debe decirse que con la orden de recepción de los dineros ordenados y la activación de la afiliación de la demandante sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida, no se está generando ninguna consecuencia adversa a Colpensiones, ya que a partir de las sumas recibidas y las semanas acreditadas, deberá Colpensiones a futuro

resolver el derecho de la actora a las eventuales prestaciones económicas que reconoce el sistema de seguridad social; además, se advierte que no se le impuso condena en costas procesales.

Con relación a la apelación de la parte demandante, tendiente a que se revoque la decisión de absolver a PROTECCIÓN S.A. del pago de costas procesales en primera instancia, esta sala encuentra que le asiste razón al apoderado judicial de la demandante, ya que los argumentos del A quo para exonerar a dicha entidad de pagar las costas procesales de primera instancia no alcanzar a desvirtuar esa obligación, derivada del criterio objetivo contenido en el artículo 365 del CGP.

Es preciso tener en cuenta que, si bien la ineficacia se habría configurado desde el traslado a COLFONDOS S.A., como la primera administradora del RAIS a que perteneció la asegurada, no menos cierto es que el acto de afiliación a PROTECCIÓN S.A. también fue ineficaz, producto de su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, de las cuales no se encuentra relevada por haber sido la segunda administradora pensional privada a que se afilió la demandante.

En consecuencia, se revocará el numeral 5º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, únicamente en cuanto se abstuvo de imponer condena en costas procesales a PROTECCIÓN S.A., para en su lugar, **CONDENAR** a dicha entidad a que asuma su pago en favor de la demandante, por haber resultado vencida en juicio. Será en la oportunidad procesal pertinente que deberá el A quo establecer el monto de dicha condena.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales a cargo de COLFONDOS S.A., vencida en el recurso, y en favor de la señora MATILDE SUAREZ LEÓN. Dicha entidad deberá pagarle a la demandante un salario mínimo legal mensual vigente para 2021.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en apelación y consulta, en orden a que **PROTECCIÓN S.A.** remita dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, con destino a Colpensiones, no solo los aportes acreditados en la cuenta de ahorro individual de la asegurada con los rendimientos financieros y el porcentaje descontado por garantía de pensión mínima, sino también las cuotas de administración descontadas y primas previsionales, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 3º de la parte resolutive de esa misma sentencia, a efectos de que **COLFONDOS S.A.**, remita dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, debidamente indexadas, no solo las cuotas de administración y de seguro previsionales, sino también los porcentajes descontados con destino al fondo de la garantía mínima, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: REVOCAR el numeral 5º de la parte resolutive de primera instancia, únicamente en cuanto se abstuvo de imponer condena en costas procesales a **PROTECCIÓN S.A.**, para en su lugar, **CONDENAR** a dicha entidad a que asuma su pago en favor de la demandante, por haber resultado vencida en juicio. Será en la oportunidad procesal pertinente que deberá el A quo establecer el monto de dicha condena.

CUARTO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

QUINTO: CONDENAR a COLFONDOS S.A. a pagar en favor de la señora **MATILDE SUAREZ LEÓN** las costas procesales de segunda instancia. Agencias en derecho a cargo de dicha entidad: Un salario mínimo legal mensual vigente para 2021.

SEXTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SÉPTIMO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **059** del **12 de abril de 2021.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>